

# El Salvador proceso

año 16  
número 668

julio 5  
1995

informativo semanal

ISSN 0259-2864

centro universitario de documentación e información

¿Quién está detrás de la "Banda de Benedicto"?

Vacilaciones y ambigüedades gubernamentales en el combate al crimen organizado

Nuevo financiamiento internacional para los acuerdos de paz

Nuevos problemas en las maquilas (I)

Costa Rica se suma al protocolo marco de integración

¿Hacia adónde va este país?

El IVA y los "padres de la patria"

## ¿Hacia adónde va este país?

El sondeo de evaluación del gobierno cursado a finales de mayo por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", daba cuenta de que la mayoría de los salvadoreños piensa que El Salvador no va por un buen camino y que, por el contrario, necesita de un cambio. Esta opinión, mantenida tan firmemente en todos los estratos de la sociedad salvadoreña, confirmada por posteriores evaluaciones y por la lectura que puede hacerse de la realidad salvadoreña al sólo salir a las calles de la ciudad capital, es probablemente uno de los indicadores más elocuentes de la situación en que se encuentra este pequeño y atropellado país centroamericano, o, por lo menos, de lo que sus habitantes consideran que son las circunstancias en que se encuentra esta sociedad luego de tres años de un tortuoso proceso de democratización.

En una encuesta aún no divulgada oficialmente, cursada a principios de este mes, el 73 por ciento de los adultos salvadoreños reconoce que el sistema social salvadoreño es poco o nada justo y apunta como causa principal de ello a la todavía escandalosa desigualdad en la distribución de la riqueza nacional. En esta misma línea, a principios del presente año, casi la totalidad de la población (nueve de cada diez salvadoreños) reconocían la necesidad de cambiar en alguna medida el sistema social de El Salvador —cifra que ha crecido desde 1989, cuando eran siete de cada diez ciudadanos los que pedían un cambio en la estructura social—. Todos estos datos y los manifiestos problemas sociales con los que cualquier salvadoreño debe convivir diariamente —violencia, alto costo de la vida, pobreza e inestabilidad social—, no muestran sino que las "cosas no pueden estar peor", como lo afirmó una de las personas encuestadas en febrero. Y esto es así a pesar de que la administración de Armando Calderón Sol ha hecho un signifi-

cativo esfuerzo en presentar al país como un "ejemplo para Centroamérica", o a pesar de los tres años y medio de ejecución de los Acuerdos de Paz.

La verdad es que en circunstancias tan positivas como las que asume el discurso oficial, no parecería necesario que el gobierno busque pactos con otras fuerzas políticas. En circunstancias de bonanza y estabilidad política —económica también—, y según el calendario original, los Acuerdos de Paz ya deberían estar totalmente cumplidos y su vigencia debería ser ya cosa del pasado. La sociedad salvadoreña debería estar disfrutando ya de los dividendos sociales de la paz. Sin embargo, por un lado, el tradicionalmente autosuficiente partido ARENA necesitó de un pacto con un nuevo aliado para apuntalar las políticas de su debilitado gobierno; por otro lado, la oposición no ha logrado armar una propuesta coherente, práctica y realista que devuelva la confianza de la población en sus representantes políticos y fortalezca la posición de los opositores frente a la ambivalencia del gobierno.

El país está mal, de eso no parece haber duda entre los salvadoreños con el mínimo grado de conciencia social —y esto no sólo lo dicen las encuestas de la UCA, sino que lo reconocen las mismos sondeos privados del gobierno—. En un proceso donde reina el pesimismo, la desconfianza, la apatía y la desesperanza, la pregunta que se impone es ¿hacia adónde va este país con estas condiciones?, ¿realmente existe un proyecto de nación del que los salvadoreños se sienten partícipes?, ¿por qué, a pesar de un proceso de institucionalización democrática en el que son visibles ciertos avances de orden político, la gente se resiste a participar e insiste en pedir cambios de rumbo?, ¿o es que la población ha quedado definitivamente marcada por la necesidad de autoritarismo en la participación política?

A partir de la opinión pública es posible

diferenciar la marcha del país en dos áreas (Proceso, 659). Por un lado, existe un reconocimiento a veces explícito, a veces tácito, por parte de la población de que el país está cambiando de forma positiva en el orden político institucional. Mucha gente piensa que hoy se respetan más los derechos humanos que antes, que es un avance la participación formal de la izquierda en los círculos políticos; y sobre todo, los salvadoreños reconocen una libertad de expresión y ciertos niveles de tolerancia que jamás habían conocido en la historia reciente nacional. No obstante, la misma gente afirma que El Salvador sigue manteniendo los problemas de siempre, señala la invariabilidad de las desigualdades económicas, reclama la falta de soluciones para el problema de la delincuencia, y se lamenta de que sus condiciones de vida no parezcan mejorar sino más bien empeorar. A la hora de hacer un balance sobre las condiciones del país, el salvadoreño común se queda con lo último para calificar a la realidad nacional. Y se decide por eso no por una inveterada actitud de pesimismo o fatalismo social, sino porque éste es lo que en última instancia determina su forma de vida cotidiana, su capacidad para sobrevivir en esta sociedad y sus expectativas hacia el futuro propio y el de sus hijos.

En un sondeo hecho a principios de 1994 por el IUDOP, tres cuartas partes de los salvadoreños decían preferir el desarrollo económico antes que las libertades políticas. En la marcha del proceso, y como hace diez años, los ciudadanos están esperando respuestas a los problemas económicos y de violencia antes que a los problemas políticos, los cuales "no dan de comer". En estas circunstancias parece claro entonces que mientras no se logren resolver esas dificultades, los avances de orden político seguirán siendo muy frágiles. Mientras el sistema social no sea capaz de resolver los dilemas que tienen que ver con la supervivencia de la población, ésta puede verse tentada a apelar a soluciones y a intermediarios que pueden socavar el proceso político. Un ejemplo de estos peligros es la petición de los salvadoreños, a principios de año, para que el ejército saliera a las calles a apoyar las tareas de patrullaje de la PNC en contra

de la delincuencia, o cierto apoyo aparente a grupos ilegales armados que eliminan a las personas sospechosas de ser criminales.

En el fondo y en la medida en que la gente siga percibiendo la falta de avance en sus condiciones de vida, este país seguirá estando en el borde de la posibilidad de acudir al autoritarismo para resolver lo que aparentemente el sistema político con cierta vocación democrática no puede resolver. Los últimos acontecimientos políticos no hacen más que confirmar estos peligros.

Ciertamente, sucesos como el Pacto de San Andrés podrían interpretarse como un avance en el sistema político desde la perspectiva de que el partido en el poder, antes que forzar la institucionalidad del país, se vio obligado a negociar con otra agrupación (no del todo bien vista por el mismo partido) para poder llevar adelante sus propósitos; sin embargo, un examen más cuidadoso de la forma en que se concretó tal Pacto debe tomar en cuenta el hecho de que el gobierno buscó apoyo dentro de las reglas del juego porque las medidas que proponía eran profundamente impopulares. La pregunta es entonces ¿qué hubiera hecho el gobierno si las medidas propuestas hubieran gozado de la aprobación popular?, ¿habría llegado a forzar la institucionalidad democrática? Las experiencias anteriores y la forma de operar de la administración en este año ponen en entredicho el compromiso democrático de las autoridades del país en situaciones radicales y de emergencia. Hay que recordar que hasta el momento, este gobierno se ha caracterizado por el uso de la fuerza excesiva, dentro de cierta legalidad, para detener protestas y manifestaciones.

La verdad es que mientras el desarrollo democrático de nuestro país no contemple una buena dosis de democracia y de justicia económica, mientras los esfuerzos en el desarrollo social se limiten sólo a paliar los efectos causados por el programa neoliberal sin tocar la base de los problemas de pobreza, los avances de orden político seguirán siendo endeble y retrocedibles; y éste país, sin más, continuará teniendo de perspectiva al abismo de la desestabilización y del autoritarismo y padeciendo de la falta de un rumbo claro hacia el futuro.